

agosto de 1985, designándose Interventor del Estado en la liquidación al Inspector perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado don Fernando Laguna Gómez.

Cuarto.—Conceder un plazo de quince días a la Entidad, a partir de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para proceder al nombramiento de liquidador o liquidadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, 7. de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, y para dar publicidad a la disolución con arreglo al artículo 90, 1, del Reglamento de 1 de agosto de 1985.

Los liquidadores, a quienes corresponde la representación, administración y gestión de la Entidad, durante el periodo de liquidación, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 93 y concordantes del Reglamento precitado.

Lo que digo a V. I.

Madrid, 28 de enero de 1986.—P. D., el Secretario de Estado de Economía y Planificación, Miguel Angel Fernández Ordóñez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

3432 *ORDEN de 28 de enero de 1986 de intervención administrativa en la liquidación de la Entidad «Mutua Barcelonesa de Seguros» (MUBASE).*

Ilmo. Sr.: En el expediente administrativo abierto en la Dirección General de Seguros a la Entidad «Mutua Barcelonesa de Seguros» (MUBASE), a raíz de las comprobaciones inspectoras llevadas a cabo en su domicilio social, con arreglo a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro privado, ha resultado comprobada la existencia de graves irregularidades en la administración y contabilidad de la Entidad, en términos que impiden conocer su verdadera situación patrimonial, y de pérdidas acumuladas que la sitúan en la causa de disolución prevista en el artículo 30, 1, d), de la Ley 33/1984 precitada.

En aplicación de lo dispuesto en las letras c) y h) del número 2 del artículo 42, sobre medidas cautelares de dicha Ley, la Dirección General de Seguros prohibió a la Entidad la contratación de nuevos seguros, y suspendió en sus funciones de Administradores de la misma a don Ignacio Noguerras Andrés y doña María Luisa Cerezo Sifas.

Finalmente, y a consecuencia de la Resolución de la Dirección General de Seguros de 24 de octubre de 1985, la Junta general extraordinaria de mutualistas, celebrada el 20 de diciembre de 1985, acordó la disolución de la Entidad y el nombramiento de don Antonio Torrente Castel como Liquidador.

Este Ministerio, de acuerdo a lo expuesto y a lo informado y propuesto por la Dirección General de Seguros, ha acordado:

Primero.—Intervenir la liquidación de «Mutua Barcelonesa de Seguros» (MUBASE), iniciada por la disolución acordada en Junta general extraordinaria de mutualistas, en aplicación de lo dispuesto en el número 3 del artículo 31 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro privado, y en el párrafo del número 1 del artículo 98 del Reglamento de 1 de agosto de 1985.

Segundo.—Designar a tal efecto a los Inspectores del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado don Lino Llamas Madurga para el cargo de Interventor del Estado, titular en la liquidación de la referida Entidad, y don Eduardo Pan Montojo para el cargo de Interventor del Estado suplente, con las facultades y funciones que al efecto señala el ordenamiento vigente y, en particular, el Reglamento de Ordenación del Seguro Privado de 1 de agosto de 1985.

Tercero.—Anticipar el vencimiento de los contratos de seguro con arreglo a lo dispuesto en el número 2 del artículo 31 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, acordándose a estos efectos que todos los contratos de seguro suscritos por «Mutua Barcelonesa de Seguros» (MUBASE) que se hallen vigentes a 1 de marzo de 1986, venzan dicho día. El Liquidador de la Entidad deberá adoptar las medidas oportunas para que los tomadores de los seguros tengan inmediato conocimiento del aludido vencimiento.

Cuarto.—Aplicar a la presente disolución lo dispuesto en el apartado e) del artículo 3 del Decreto-ley 18/1964, de 3 de octubre, y en el artículo 2.4, del Decreto 2532/1967, de 11 de octubre, a los efectos de que sean asumidas por el Consorcio de Compensación de Seguros las obligaciones de la Entidad disuelta en el ámbito del seguro obligatorio del automóvil.

Lo que digo a V. I.

Madrid, 28 de enero de 1986.—P. D., el Secretario de Estado de Economía y Planificación, Miguel Angel Fernández Ordóñez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

3433 *ORDEN de 28 de enero de 1986 de disolución de oficio e intervención en la liquidación de la Entidad «Unión Sanitaria Asistencial, Sociedad Anónima».*

Ilmo. Sr.: Según Resolución de la Dirección General de Seguros de 10 de septiembre de 1985, en las actuaciones inspectoras practicadas ante la Entidad «Unión Sanitaria Asistencial, Sociedad Anónima» se ha constatado que ésta no realiza actividad social alguna en el domicilio social comunicado al Ministerio de Economía y Hacienda.

En consecuencia, se concedió a la Entidad un plazo de quince días mediante aviso publicado en el «Boletín Oficial del Estado», con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.6 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro privado, para que acreditara ante la Dirección General de Seguros el ejercicio efectivo de la actividad aseguradora, con arreglo a la legislación vigente, advirtiéndole que, en caso contrario, se procedería de inmediato a formular propuesta de Orden de revocación de la autorización administrativa para operar en todos los ramos en que estuviera autorizada, declarándola disuelta.

Transcurrido dicho plazo, la Entidad «Unión Sanitaria Asistencial, Sociedad Anónima» no ha acreditado el ejercicio efectivo de la actividad aseguradora, con arreglo a la vigente legislación, ni ha comparecido ante la Dirección General de Seguros.

En su virtud, a la vista de lo expuesto y de los antecedentes que obran en el expediente.

Este Ministerio ha acordado lo siguiente:

Primero.—Revocar la autorización administrativa para operar en todos los ramos en que esté autorizada la Entidad «Unión Sanitaria Asistencial, Sociedad Anónima», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1, b), de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del Seguro privado, y el artículo 86.1, b), y 86.5 del Reglamento de Seguros, de 1 de agosto de 1985.

Segundo.—Disolver de oficio a la Entidad, en aplicación de lo establecido en el artículo 30.1, b) y c), de la mencionada Ley, al haber quedado comprobado que la inactividad de sus órganos sociales ha llegado a imposibilitar su funcionamiento y el cumplimiento del fin social.

Tercero.—Intervenir la liquidación de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.1 del Reglamento de 1 de agosto de 1985, designándose Interventor del Estado en la liquidación al Inspector perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, don Fernando Laguna Gómez.

Cuarto.—Conceder un plazo de quince días a la Entidad, a partir de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para proceder al nombramiento de liquidador o liquidadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.7 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, y para dar publicidad a la disolución con arreglo al artículo 90.1 del Reglamento de 1 de agosto de 1985.

Los liquidadores, a quienes corresponde la representación, administración y gestión de la Entidad, durante el periodo de liquidación, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 93 y concordantes del Reglamento precitado.

Lo que digo a V. I.

Madrid, 28 de enero de 1986.—P. D., el Secretario de Estado de Economía y Planificación, Miguel Angel Fernández Ordóñez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

3434 *ORDEN de 28 de enero de 1986 de disolución de oficio e intervención en la liquidación de la Entidad «Iguatorial Policlínico Castellano».*

Ilmo. Sr.: Según Resolución de la Dirección General de Seguros de 10 de septiembre de 1985, en las actuaciones inspectoras practicadas ante la Entidad «Iguatorial Policlínico Castellano», se ha constatado que ésta no realiza actividad social alguna en el domicilio social comunicado al Ministerio de Economía y Hacienda.

En consecuencia, se concedió a la Entidad un plazo de quince días mediante aviso publicado en el «Boletín Oficial del Estado», con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.6 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro privado, para que acreditara ante la Dirección General de Seguros el ejercicio efectivo de la actividad aseguradora, con arreglo a la legislación vigente, advirtiéndole que, en caso contrario, se procedería de inmediato a formular propuesta de Orden de revocación de la autorización administrativa para operar en todos los ramos en que estuviera autorizada, declarándola disuelta.

Transcurrido dicho plazo, la Entidad «Iguatorial Policlínico Castellano» no ha acreditado el ejercicio efectivo de la actividad aseguradora, con arreglo a la vigente legislación, ni ha comparecido ante la Dirección General de Seguros.